

Los retos de la Educación ante la pandemia del coronavirus

En un reciente editorial de *Temas para el debate* sobre las "Reformas institucionales" se indicaba que con la llegada de la pandemia algunas políticas públicas tradicionalmente consideradas como sectoriales habían visto elevada su consideración hasta convertirse en políticas prioritarias. Si entonces tal afirmación se refería, entre otros aspectos, a la sanidad, por el impacto directo que aquella tiene sobre la vida y la salud de los ciudadanos,

la experiencia del último trimestre del pasado curso y el inicio del actual han colocado a la educación en el centro del debate social; un debate que ha rebasado las fronteras de cada país y ha hecho que los principales organismos internacionales llamen la atención sobre las repercusiones de la epidemia en los sistemas educativos, y sobre la necesidad de que las autoridades nacionales

hagan de la educación una prioridad en sus agendas políticas. El informe *La educación en tiempos de Covid-19 y más allá*, presentado a principios de agosto por António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, recordaba que todavía a mediados de julio las escuelas permanecían cerradas en más de 160 países y dicho cierre afectaba a más de 1.000 millones de estudiantes. Por su parte, los expertos de UNESCO fijaban en 24 millones los alumnos que podrían abandonar sus estudios como consecuencia de la epidemia, en lo que ya se considera el trastorno más grave registrado en toda la historia de la educación; una catástrofe que podría afectar a más de una generación de estudiantes.

En España, el cierre de los centros educativos durante el último trimestre provocó que de los ocho millones de escolares no universitarios, 500.000 se

"desengancharan" de una u otra forma del sistema, al no poder continuar las enseñanzas de modo virtual; incluso para aquellos que tienen acceso a la educación a distancia, los buenos resultados dependen más que nunca de las condiciones socioeconómicas de sus familias. Esta realidad va a obligar a las administraciones educativas a realizar un sobreesfuerzo para recuperar a estos estudiantes a lo largo del presente curso, pero



desde un punto de vista conceptual también nos obliga como sociedad a una reflexión más general: si la educación actúa como factor de igualdad social, si a pesar de ciertos lastres en España el "ascensor social" todavía funciona más rápido que la media de los países europeos (OCDE: *A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility*, 2018), y si en apenas unos meses la emergencia sanitaria ha hecho que más del 6% de la población escolar se haya visto desplazada del sistema educativo, urge una toma de conciencia como país de los riesgos que ha supuesto la pandemia para la educación y la elaboración de un plan de trabajo que incorpore lo aprendido en esta etapa.

En este sentido, instituciones del ámbito de la educación y de la infancia ya han apuntado varias líneas de actuación, en algunos casos coincidentes:

tanto Naciones Unidas como Save the Children (*Save our education*, 2020) y entre nosotros UNICEF-España (*COVID-19: Reimaginar la educación*, agosto 2020), plantean la necesidad de encontrar un equilibrio entre los riesgos para la salud y los riesgos para la educación con la vista puesta en la reapertura de los centros educativos, ya que es opinión compartida entre los expertos que la enseñanza presencial es insustituible sobre todo en los primeros cursos donde los niños se guían y aprenden por experiencias sensoriales que requieren la interpersonalidad. El factor emocional en las etapas más tempranas de la educación se valora cada día como más importante, siendo pieza fundamental del bienestar educativo, y su ausencia o vulneración priva a los más pequeños de modelos para desarrollar la empatía que requiere su socialización. Si la falta de clases presenciales ha podido afectar al desarrollo cognitivo de los menores, dicho riesgo puede haber sido mayor respecto de su progreso emocional, siendo ambos necesarios para el desarrollo integral de su personalidad.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS: *DFTB COVID-19. Evidence review*, abril 2020) como reputadas agencias estatales, fundaciones (Instituto Robert Koch, Instituto Pasteur), revistas y estudios científicos recientes (*British Medical Journal: "Clinical characteristics of children and young people admitted to hospital with covid-19 in United Kingdom"*, agosto 2020), coinciden en estimar un bajo riesgo de contagio de niños y jóvenes. Esta realidad ha hecho que la mayoría de los países europeos hayan apostado por una vuelta a las aulas presencial, sobre todo para los estudiantes de educación infantil y primaria.

Sin embargo, la opinión pública, en particular el sector que tiene hijos en edad escolar, se divide entre quienes recelan del inicio de curso por el posible contagio de los menores que a su vez incrementaría el riesgo de infección de los adultos, en especial de los abuelos, y quienes tras la anterior experiencia del cierre de las escuelas apuestan por el retorno de sus hijos a clase, ante la dificultad de gestionar otra vez su enseñanza desde casa cuando ellos han entrado de nuevo en el engranaje laboral. En definitiva, dos posturas que evidencian las tensiones ante la ecuación salud-economía y que al igual que el par salud-educación requiere de un adecuado y no fácil equilibrio.

Siendo la presencialidad el *desideratum*, esto no implica que pueda cumplirse. Precisamente porque hemos visto cómo en unos pocos días hubo que cambiar nuestro tradicional modelo de enseñanza por otro *online*, necesitamos diseñar un sistema diferente, quizá mixto, para que una eventual vuelta total o parcial a los hogares no nos vuelva a coger desprevenidos. Nos guste o no, hasta la aparición de una vacuna eficaz, el sistema educativo seguirá regido por el imperativo sanitario.

Las exigencias formativas y de maduración social y emocional, sobre todo en las etapas más tempranas de la educación, obligan a encontrar un equilibrio entre la prevención de los riesgos para la salud y la necesidad de una educación presencial en centros adecuados.

Este posible modelo mixto debería tener como destinatarios al conjunto de la comunidad educativa: A los estudiantes, a quienes habría que asegurar el acceso al uso de las tecnologías de la información y el conocimiento pues, como venimos señalando, el impacto de la pandemia ha ensanchado entre ellos la brecha digital que alimenta a su vez la brecha social. Al profesorado, al que se ha exigido un esfuerzo ímprobo que les ha puesto al servicio del alumnado sin limitación de horario, con medios propios y con un déficit de formación digital que deberá ser subsanado con rapidez. Al personal de administración y servicios, que ha tenido que adaptarse sobre la marcha y con no pocas deficiencias, como el resto de la Administración, al teletrabajo. Y por supuesto a las familias y AMPAS con las que en tiempos de incertidumbre la comunicación es más necesaria que nunca.

El debate sobre la educación tras la COVID19 no estaría completo sin la universidad. La mayoría de los planteamientos hechos hasta aquí se pueden replicar para la educación superior: desde la presencialidad, pasando por la digitalización hasta las posibles repercusiones negativas de la pandemia. En este último caso las valoraciones son aún prematuras, pero es de temer que en el curso que se inicia la caída de matrícula sea importante y, según la CRUE, afecte de modo especial a los posgrados y a los campus más grandes que tienen mayor movilidad de estudiantes, muchos de los cuales son extranjeros que se quedarán en su país. **TEMAS**